



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA

FECHA: Doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
REFERENCIA: Proceso ejecutivo laboral de U.I. N° 2022- 00148-00.
EJECUTANTE: Cristian Darío Bello Guío
EJECUTADO: Víctor Manuel Sánchez Gil

Cristian Darío Bello Guío, por conducto de apoderado, solicitó que se libre mandamiento de pago a su favor y contra Ferney Orlando Cancelado Roncancio, por la suma de ocho millones ochenta y cuatro mil setecientos treinta pesos (\$8.084.730), que corresponden a honorarios dejados de pagar por el ejecutado, junto con los intereses generados que reclama desde el 22 de febrero de 2022, hasta cuando se verifique el pago y por las costas en el trámite de este proceso. Como soporte de esta reclamación aporta los siguientes documentos:

1. Copia de contrato de prestación de servicios como abogado, celebrado entre Cristian Darío Bello Guío y Víctor Manuel Sánchez Gil el 23 de junio de 2020.
2. Pantallazo de correo electrónico enviado por la entidad financiera Davivienda a la dirección "SANCHEZGILVICTORMANUEL@gmail.com" en que informa el registro de una transacción bancaria.
3. Copia de formulario de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional diligenciado a la compañía de seguros Positiva a nombre de Víctor Manuel Sánchez Gil.
4. Copia de recurso de apelación "*dictamen de pérdida de capacidad laboral*" presentado por Víctor Manuel Sánchez Gil ante la compañía de seguros Positiva.
5. Copia de dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional con fecha 24 de agosto de 2020, realizado a Víctor Manuel Sánchez Gil por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá.
6. Copia de recurso de apelación "*dictamen de pérdida de capacidad laboral*" presentado por Víctor Manuel Sánchez Gil ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá.
7. Copia de dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional con fecha 25 de febrero de 2021, realizado a Víctor Manuel Sánchez Gil por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Frente al proceso ejecutivo laboral el CPT en su artículo 100 señala que "*será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*", con lo que admite una variada gama de títulos ejecutivos, entre los que podemos enunciar las actas de conciliación, los actos administrativos, las sentencias o decisiones judiciales notificadas y ejecutoriadas, entre otros, siempre que tengan origen en una relación de trabajo.

El CPT y de las SS, no regula el trámite del proceso ejecutivo por lo que por remisión normativa derivada del artículo 100 y 145 del CPT debe acudirse al dispuesto en la materia por el CGP.

De conformidad con el artículo 430 del CGP, el juez librará mandamiento de pago o ejecutivo, ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que el juez considere legal, cuando a la demanda **se acompañe un**

documento que preste mérito ejecutivo. Ahora, frente a las características del título ejecutivo son las previstas en el artículo 422 del CGP que nos precisa que un título ejecutivo es un documento o conjunto de documentos que prueban la existencia de una obligación **clara, expresa y exigible en cabeza del deudor y a favor del demandante.**

En tal entendido el título ejecutivo debe acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible frente al ejecutado, *clara* porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse por la simple revisión del título; *expresa* en la medida que debe estar especificada en documentos o documentos que imponen al obligado una conducta de dar, hacer o no hacer determinada; finalmente, la obligación debe ser *exigible* en la medida que debe cierto el tiempo en el cual debe ejecutarse o cumplirse la obligación, y que al momento de demandar su ejecución esta no esté sujeta al cumplimiento de un plazo o condición.

Descendiendo al caso bajo estudio, y luego de verificar la documental base del recaudo, se advierte que la misma no es idónea para configurar título ejecutivo, pues no permite concluir con claridad suficiente la existencia de una obligación en cabeza del ejecutado y a favor del ejecutante, en las condiciones que reclama la parte ejecutante, y, por tanto, con condiciones de exigibilidad judicial mediante trámite ejecutivo.

Lo anterior atendiendo a que, si bien se puede establecer que las partes acordaron la celebración de un contrato de prestación de servicios como abogado, atendiendo al siguiente objeto:

“EL ABOGADO, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica utilizando sus propios medios profesionales y los de su equipo de trabajo, prestará sus servicios jurídicos al CONTRATANTE.”, a través de la siguiente actuación “(...) Defensa judicial en el proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de la empresa CARBONES Y COQUES CULLINAN S.A.S. (...) ello con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los siguientes derechos laborales: pago de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios sufrida por el contratante en el accidente laboral ocurrido el día 19 de diciembre de 2017, en mina de carbón explotada por la empleadora, además de los perjuicios derivados del siniestro laboral anteriormente indicado al generarse culpa del empleador en la ocurrencia del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: En ejecución de este contrato también se efectuará actividad profesional del CONTRATISTA en los trámites correspondientes a conseguir la calificación de la pérdida de capacidad laboral, determinación de origen y fecha de estructuración de las patologías sufridas por el accionante con ocasión del accidente laboral acaecido el día 19 de diciembre de 2017 (...).

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ejecución de este contrato también se efectuará actividad del CONTRATISTA en los trámites correspondientes a conseguir prestaciones económicas y asistenciales devenidas del sistema de seguridad social en riesgos laborales en favor del CONTRATANTE como lo puede ser el pago de la indemnización permanente parcial y todo derecho económico si a ello hubiese lugar. (sic)

La documental aportada no permite establecer que las gestiones encomendadas hayan sido gestionadas por el abogado demandante, vale precisar que, si bien se aportan gestiones desarrolladas en procura de la calificación de pérdida de capacidad laboral del demandado, estas no permiten colegir que hayan sido promovidas por el abogado accionante como apoderado.

Y frente a los recursos que el accionante afirma haber promovido dentro de este trámite, los documentos aportados no cuentan con radicación que de certeza de que fueron los que propiciaron las decisiones dentro del trámite de calificación y reconocimiento de la indemnización.

Así las cosas, ante la falta de configuración del título ejecutivo no es viable librar mandamiento de pago deprecado por la accionante.

Atendiendo a que niega mandamiento de pago no hay lugar a pronunciamiento frente a medidas cautelares reclamadas.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja

R E S U E L V E

PRIMERO: **Negar el mandamiento de pago** deprecado contra Víctor Manuel Sánchez Gil por Cristian Darío Bello Guío, según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. - En caso de requerirse por la parte ejecutante devolver la demanda y sus anexos sin necesidad de desglose.

TERCERO. - En firme esta decisión, por Secretaría archivar el expediente dejando las constancias de rigor.

Notifiquese y cúmplase. -



CÉSAR NORBERTO ESCOBAR MENDIVELSO
Juez

 JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE TUNJA	
Estado 17	Fecha 20 de mayo de 2022
 SECRETARIO	